



Asunto: Atención solicitud de información
330025923001770

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2023.

Apreciable persona solicitante
Presente.

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio **330025923001770**, recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del 23 de octubre de 2023, mediante la cual requirió:

Solicitud: "Requiero: 1. Copia certificada de los contratos que sostuvo la Secretaría de Economía con las empresas NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V., y NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V., durante el periodo del primero de noviembre del año 2015 al 31 de octubre del año 2017. Pues la Secretaría de Economía subcontrató personal a través de esas dos empresas. 2. Copia certificada de los recibos de pago que le hizo la Secretaría de Economía a las empresas NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V., y NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V., durante el periodo del primero de noviembre del año 2015 al 31 de octubre del año 2017. Dinero que dichas empresas utilizaron para pagar la nómina del personal subcontratado en dicho periodo. 3. Copia certificada del listado del personal que subcontrató la Secretaría de Economía a través de las empresas NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V., y NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V., durante el periodo del primero de noviembre del año 2015 al 31 de octubre del año 2017. El listado (formato de tabla) debe contener al menos los siguientes datos: No. Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno CURP RFC Fecha de inicio de contratación (dd/mm/aaaa) Fecha de término de contratación (dd/mm/aaaa) Nombre de la dependencia y área de la dependencia donde prestó servicio Nombre de la empresa que subcontrató Nota: Se tiene conocimiento que, derivado de la protección de datos personales en posesión de terceros, es probable que la información que se solicita en el numeral 3 sea testada por la Secretaría de Economía. No obstante, se solicita que los datos de la suscrita Lizbeth Escorcía Martínez no se testen ya que soy quien hace la solicitud y soy responsable del uso que dé a los mismos. 4. Copia certificada de los contratos laborales que sostuvieron las empresas NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V. (periodo primero de noviembre del año 2015 al 31 de marzo del año 2016), y NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V. (del primero de abril del año 2016 al 31 de octubre del año 2017), con la ciudadana Lizbeth Escorcía Martínez.

Datos complementarios: La información debe tenerla el área de recursos humanos y el área jurídica de la Secretaría de Economía." (SIC)

Asimismo, solicitó la exención del pago de derechos por la entrega de la información requerida en la petición que antecede, bajo la siguiente justificación:

"Justificación para exentar pago: Actualmente me encuentro desempleada y no cuento con el recurso económico para realizar el pago. La información la requiero pues estoy en proceso de demanda laboral en contra de la Secretaría de Economía por despido injustificado, pues me corrieron por negarme a dar mi renuncia pues soy personal del servicio profesional de carrera y eso significa que tengo estabilidad en el empleo pues concursé la plaza y la gané; y solamente puedo ser removida del cargo si incumplo los supuestos contemplados en el artículo 64 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. No obstante, en caso de no ser considerada mi situación, haré todo lo posible por cubrir el costo de las copias certificadas pues me son indispensables para la demanda laboral que he mencionado. Por último, agradeceré recibir en la oficina del INAI los originales de las copias certificadas pues serán documentos probatorios en la demanda laboral que entablo en contra de dicha dependencia federal. Gracias." (Sic).



Se informa que su petición fue turnada a la **Unidad de Administración y Finanzas**, de conformidad con las atribuciones que tiene conferidas en el artículo **13**, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, quien a través de las Direcciones Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad y de Recursos Materiales y Archivo, en respuesta a su petición informaron mediante los oficios **712.2023.1530** y **711.2023.763**, respectivamente, lo siguiente:

*“En principio, debe tenerse en cuenta que, **el derecho de acceso a la información** se encuentra previsto en el artículo 6o., apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo contenido deja claro que todo acto de autoridad, en principio, es de interés general y, por ende, susceptible de poder ser conocido por todas las personas.*

En ese sentido, tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en sus artículos 3, fracción VII, 4 y 18 como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) en sus artículos 3 y 12, sostienen que este derecho comprende la posibilidad de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información que documenten los sujetos obligados en ejercicio de sus facultades, funciones y competencias; debiendo las autoridades documentar todo acto que derive de las mismas, y presumiendo su existencia si se refiere a éstas.

De ahí que el derecho a la información comprende las garantías siguientes: 1) el derecho de informar (difundir); 2) el derecho de acceso a la información (buscar), y 3) el derecho a ser informado (recibir).

Sin embargo, todo derecho, está sujeto a restricciones permisibles, de conformidad con los requisitos constitucionales y convencionales; pues el derecho de acceso a la información no tiene como finalidad, establecer una garantía individual para obtener la información en el momento y de la forma que el particular lo decida, sino que existen procedimientos y condiciones que regulan la obligación de brindar los documentos solicitados tal como lo señala la legislación de la materia.

En virtud de lo anterior, las dependencias y entidades sólo están obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, motivo por el cual estas últimas no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 130, cuarto párrafo de la LFTAIP, en donde se establece que: “los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquéllos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita”, por lo que únicamente están obligadas a proporcionar la información contenida en los documentos que genera, obtiene, adquiere, transforma o conserva en cualquier título, de conformidad con los artículos 1, 2, fracción I y 3 de la LFTAIP.

En cumplimiento al principio de máxima publicidad, la Dirección General de Recurso Materiales y Archivo, por conducto de la Dirección de Contratos realizó con un criterio amplio y razonable la búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos que emite y genera, por lo que se hace de su conocimiento que lo correspondiente al año 2015, se encuentra en baja documental, por lo que



no se cuenta con expresión documental relacionada con contratos celebrados con las empresas Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. de C.V. y Negocios Universal TD2 S. de R.L. de C.V. en ese año.

Ahora bien, relativo a los contratos de los años 2016 y 2017, se pone a disposición la información solicitada, la cual consiste en:

1.- Contrato número **DGRMSG-60-16**, celebrado con las empresas Negocios Universal TD2, S. de R.L. de C.V., y SCOI Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V. (15 páginas del contrato y 168 de sus anexos, haciendo un total de 183 páginas), y su Convenio Modificatorio de fecha 22 de diciembre de 2016 (6 páginas).

2.- Contrato número **DGRMSG-60-17**, celebrado con las empresas Negocios Universal TD2, S. de R.L. de C.V.; SCOI Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V., y SITAH Soluciones Integrales con Talento Humano, S. de R.L. de C.V. (18 páginas del contrato y 212 de sus anexos, haciendo un total de 230 páginas), y su Convenio Modificatorio del 22 de diciembre de 2017 (6 páginas).

Sin embargo, de la revisión de dichos instrumentos contractuales, se advierte que los mismos contienen información considerada como **confidencial**, de conformidad con lo establecido en los artículos 100, 106, fracción I y 116, último párrafo de la LGTAIP y 97, 98 fracción I y 113, fracción III de la LFTAIP; así como los numerales Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, como es el **número de cuenta bancaria** y el **número de cuenta CLABE de las personas morales** que celebraron los contratos.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 44, fracción II y 103 de la LGTAIP, así como 65, fracción II, 102, 118 y 140 de la LFTAIP; se solicita se ponga a consideración del Comité de Transparencia de esta Secretaría de Economía, las versiones públicas de los contratos de prestación de servicios, para que confirme la clasificación de la información, previa entrega al solicitante (se acompañan al presente las versiones públicas de los referidos contratos).

Ahora bien, por lo que corresponde, al requerimiento de **"4. Copia certificada de los contratos laborales que sostuvieron las empresas NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V. (periodo primero de noviembre del año 2015 al 31 de marzo del año 2016), y NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V. (del primero de abril del año 2016 al 31 de octubre del año 2017), con la ciudadana Lizbeth Escorcía Martínez."**, se hace de su conocimiento que, en cumplimiento al principio de máxima publicidad, se realizó con un criterio amplio y razonable una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección General, y se hace de su conocimiento que no se encontró documentación o información respecto de lo solicitado, siendo el resultado de la búsqueda **igual a cero**, por lo que resulta aplicable el criterio con clave de control: **SO/018/2013**, emitido por el INAI, que a la letra establece:

"Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo."



No se omite mencionar, que la información de los contratos de las personas físicas que contrataron cada una de las empresas proveedoras del servicio, seguramente obran en poder de las mismas, ya que ellas fueron quienes directamente contrataron a las personas para la prestación de los servicios especializados con terceros para las diversas áreas de la Secretaría de Economía.

Lo anterior, máxime si consideramos que la Secretaría de Economía no contrató de forma directa a las personas físicas para que le prestaran un servicio, sino que contrató a personas morales para la prestación de los servicios objeto de los contratos.

Por lo antes expuesto, es que no se cuenta con documentos que permitan verificar qué personal prestó servicios a esta Secretaría de Economía, derivado de los contratos aludidos con anterioridad, de ahí que no se localizó información sobre contratos laborales celebrados entre la C. Lizbeth Escorcia Martínez y las empresas **NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V.** y **NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V.** del primero de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2017.

Ahora bien, la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad es competente respecto del punto 2 de la presente solicitud de acceso a la información de conformidad con las facultades conferidas a esa Dirección General en el artículo 58 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

Por lo anterior y en cumplimiento al principio de máxima publicidad, en la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, se efectuó una búsqueda exhaustiva y razonable en los registros programáticos, presupuestarios, contables y documentales que obran en esta unidad responsable, sobre la cual, se comunica lo siguiente:

Se encontraron 420 facturas (**ANEXO 1**) correspondientes al periodo comprendido del 11 de noviembre del 2015 al 26 de octubre de 2017 debidamente pagadas a la empresa **Negocios Optimus Jumace S DE RL DE CV** y a la empresa **Negocios Universal TD2 S DE RL DE CV**. Cabe mencionar que cada factura va acompañada de un listado de personal, por lo que de igual forma son 420 listados, con lo cual se brinda atención al punto 3 de la solicitud que nos ocupa.

Por otro lado, se pondrá a disposición del solicitante 840 copias certificadas, previo pago de costo de reproducción de conformidad con el artículo 138 y 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra establecen:

“Artículo 138: La información deberá entregarse siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de las cuotas de reproducción correspondientes.”

“Artículo 145: En casos de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

- I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información**
- II. El costo de envío, en su caso, y**
- III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.**

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. La Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante [...]



En ese sentido, es importante señalar que el viernes 27 de octubre de 2023, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Economía remitió en alcance a esta solicitud de acceso a la información, la petición siguiente, solicitando el pronunciamiento respectivo.

"Justificación para exentar pago: Actualmente me encuentro desempleada y no cuento con el recurso económico para realizar el pago. La información la requiero pues estoy en proceso de demanda laboral en contra de la Secretaría de Economía por despido injustificado, pues me corrieron por negarme a dar mi renuncia pues soy personal del servicio profesional de carrera y eso significa que tengo estabilidad en el empleo pues concursé la plaza y la gané; y solamente puedo ser removida del cargo si incumplo los supuestos contemplados en el artículo 64 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. No obstante, en caso de no ser considerada mi situación, haré todo lo posible por cubrir el costo de las copias certificadas pues me son indispensables para la demanda laboral que he mencionado. Por último, agradeceré recibir en la oficina del INAI los originales de las copias certificadas pues serán documentos probatorios en la demanda laboral que entablo en contra de dicha dependencia federal. Gracias. " (Sic).

Al respecto, me permito comentarle que el artículo 5, fracción I de la Ley Federal de Derechos establece que tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que sean prestados por cualquiera de las Secretarías de Estado, se pagarán derechos conforme a las cuotas que para cada caso a continuación se señalan, salvo en aquellos casos que en esta Ley se establecen expresamente, **expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio \$25.03.**

Relacionado con lo anterior, el artículo 3 de la propia Ley Federal de Derechos, establece en la parte que nos interesa lo siguiente:

"Artículo 3o.- Las personas físicas y las morales pagarán los derechos que se establecen en esta Ley en las oficinas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El pago de los derechos que establece esta Ley deberá hacerse por el contribuyente previamente a la prestación de los servicios o previo al uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, salvo los casos en que expresamente se señale que sea posterior.

Cuando no se compruebe que el pago de derechos se ha efectuado previamente a la prestación del servicio o del uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación y se trate de derechos que deban pagarse por anticipado, el servicio, uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación no se proporcionará.

[...]

Al servidor público encargado de la prestación de los servicios o del otorgamiento del uso, goce, explotación o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación que incumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior se le impondrán las sanciones que correspondan de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

[...]"

Como se observa de la disposición invocada, las personas servidoras públicas tienen la obligación de cobrar los derechos que correspondan por la prestación de bienes o servicios a cargo del Estado, por lo que, de no cumplir con esta obligación, pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa.



En efecto, el cobro de los derechos, no es una facultad potestativa a cargo de las autoridades federales, por el contrario, se trata de una obligación que como personas servidoras públicas están obligadas a cumplir, sin que exista la posibilidad de justificar el no cobro de los derechos respectivos por cualquier circunstancia -como en el caso que nos ocupa, por la falta de recursos económicos para cubrir su pago por la falta de empleo-.

En tal virtud, estas Unidades Administrativas no se encuentran en aptitud de eximir el pago de los derechos correspondientes por las copias certificadas solicitadas."

Asimismo, su petición fue turnada a la **Unidad de Apoyo Jurídico**, de conformidad con las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 14, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, quien a través de la Coordinación de Convenios y Contratos, en respuesta a su petición informó mediante el oficio **110.04.401.2023**, respectivamente, lo siguiente:

*"Sobre el particular, con fundamento en los artículos 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y de conformidad a las facultades otorgadas a la Coordinación de Convenios y Contratos, en el artículo 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (RISE), se hace de su conocimiento que, en principio, debe tenerse en cuenta que, **el derecho de acceso a la información** se encuentra previsto en el artículo 6o., apartado A¹ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 13² de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo contenido deja claro que todo acto de autoridad, en principio, es de interés general y, por ende, susceptible de poder ser conocido por todas las personas.*

En ese sentido, los artículos 3, fracción VII³, 4⁴ y 18⁵ de la LGTAIP, así como 3⁶ y 12⁷ de la LFTAIP, sostienen que este derecho comprende la posibilidad de solicitar, investigar, difundir, buscar y

Artículo 6o.

(...)

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

(...)

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

(...)

VII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

(...)

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 3. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan.

El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable.



recibir información que documenten los sujetos obligados en ejercicio de sus facultades, funciones y competencias; debiendo las autoridades documentar todo acto que derive de las mismas, y presumiendo su existencia si se refiere a éstas.

De ahí que el derecho a la información comprende las garantías siguientes: 1) el derecho de informar (difundir); 2) el derecho de acceso a la información (buscar), y 3) el derecho a ser informado (recibir).

Sin embargo, todo derecho, está sujeto a restricciones permisibles, de conformidad con los requisitos constitucionales y convencionales; pues el derecho de acceso a la información no tiene como finalidad, establecer una garantía individual para obtener la información en el momento y de la forma que el particular lo decida, sino que existen procedimientos y condiciones que regulan la obligación de brindar los documentos solicitados tal como lo señala la legislación de la materia.

En virtud de lo anterior, las dependencias y entidades sólo están obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, motivo por el cual estas últimas no tienen la obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 130, cuarto párrafo⁸ de la LFTAIP, en donde se establece que: “los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquéllos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita”, por lo que únicamente están obligadas a proporcionar la información contenida en los documentos que genera, obtiene, adquiere, transforma o conserva en cualquier título, de conformidad con los artículos 1, 2, fracción I y 3 de la LFTAIP⁹.

Ahora bien, en cumplimiento al principio de máxima publicidad y transparencia, consagrados en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos a cargo de la Coordinación de Convenios y Contratos, por lo que, se hace de su conocimiento que respecto del numeral uno de la solicitud de información “**1. Copia certificada de los contratos que sostuvo la Secretaría de Economía con las empresas NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V., y NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V., durante el periodo del primero de noviembre del año 2015 al 31 de octubre del año 2017. Pues la Secretaría de Economía subcontrató personal a través de esas dos empresas**”; se localizó durante el periodo solicitado, el registro de 3 contratos de prestación de servicios, siendo estos los siguientes:

- Contrato número **DGRMSG-59-15**, celebrado con las empresas Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. de C.V.; Ovalo CP, S. de R.L. de C.V., y SCOI Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L.

⁸ Artículo 130.

(...)

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

⁹ Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:

I. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;

(...)

Artículo 3. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan.

El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.



de C.V. (14 páginas), registrado en esta Coordinación de Convenios y Contratos bajo el número 429/2015 y un Convenio Modificatorio de fecha 31 de diciembre de 2015 (6 páginas).

- Contrato número **DGRMSG-60-16**, celebrado con las empresas Negocios Universal TD2, S. de R.L. de C.V., y SCOI Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V. (15 páginas), registrado en esta Coordinación de Convenios y Contratos bajo el número 240/2016 y su Convenio Modificatorio de fecha 22 de diciembre de 2016 (6 páginas).
- Contrato número **DGRMSG-60-17**, celebrado con las empresas Negocios Universal TD2, S. de R.L. de C.V.; SCOI Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V., y SITAH Soluciones Integrales con Talento Humano, S. de R.L. de C.V. (18 páginas), registrado en esta Coordinación de Convenios y Contratos bajo el número 325/2017 y su Convenio Modificatorio del 22 de diciembre de 2017 (6 páginas).

De la revisión de dichos instrumentos contractuales, se advierte que los mismos contienen información considerada como **confidencial**, de conformidad con lo establecido en los artículos 100, 106, fracción I y 116, último párrafo de la LGTAIP y 97, 98 fracción I y 113, fracción III de la LFTAIP; así como los numerales Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, como es el **número de cuenta bancaria** y el **número de cuenta CLABE de las personas morales** que celebraron los contratos.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 44, fracción II y 103 de la LGTAIP, así como 65, fracción II, 102, 118 y 140 de la LFTAIP; se solicita se ponga a consideración del Comité de Transparencia de esta Secretaría de Economía, las versiones públicas de los contratos de prestación de servicios, para que confirme la clasificación de la información, previa entrega al solicitante (se acompañan al presente las versiones públicas de los referidos contratos).

Respecto del punto dos de la solicitud en comento que señala **“2. Copia certificada de los recibos de pago que le hizo la Secretaría de Economía a las empresas NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V., y NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V., durante el periodo del primero de noviembre del año 2015 al 31 de octubre del año 2017. Dinero que dichas empresas utilizaron para pagar la nómina del personal subcontratado en dicho periodo”**, se manifiesta que, en la cláusula Cuarta, párrafo segundo de los contratos de mérito, estableció lo siguiente:

“Los pagos se realizarán a mensualidad vencida dentro de los 20 (días) naturales posteriores a la presentación de la factura a cada Administrador del Servicio de “LA SECRETARÍA” y previa recepción de los servicios, en las cantidades y calidades solicitadas a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA” a través del acta entrega recepción de los servicios firmada por los Administradores del Servicio para “LA SECRETARÍA”. Dicho pago se realizará vía transferencia electrónica.”

En efecto, de conformidad con lo establecido en el clausulado de los contratos, los proveedores del servicio presentaran a los administradores del servicio las facturas para su pago; sin embargo esta Coordinación de Convenios y Contratos, no fungió como administradora de los citados contratos, razón por la que no cuenta con los recibos de pago, que en su oportunidad, hayan presentado las empresas prestadoras de los servicios para su pago, ni tampoco con los documentos que acrediten la transferencia electrónica que tuvo que realizar esta Dependencia como pago de los servicios prestados.

Lo anterior, máxime que de acuerdo a las facultades conferidas a esta Coordinación de Convenios y Contratos en el artículo 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, la



misma no está a cargo del ejercicio del presupuesto de la Dependencia y, en consecuencia, no le corresponde el pago de las facturas que presenten las personas prestadoras de servicios.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio con clave de control: **SO/007/2017**, emitido por el INAI donde se indicó que en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información, que a la letra establece:

“Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante, lo anterior, **en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.**”

Por lo que corresponde al requerimiento **“3. Copia certificada del listado del personal que subcontrató la Secretaría de Economía a través de las empresas NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V., y NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V., durante el periodo del primero de noviembre del año 2015 al 31 de octubre del año 2017. El listado (formato de tabla) debe contener al menos los siguientes datos: No. Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno CURP RFC Fecha de inicio de contratación (dd/mm/aaaa) Fecha de término de contratación (dd/mm/aaaa) Nombre de la dependencia y área de la dependencia donde prestó servicio Nombre de la empresa que subcontrató Nota: Se tiene conocimiento que, derivado de la protección de datos personales en posesión de terceros, es probable que la información que se solicita en el numeral 3 sea testada por la Secretaría de Economía. No obstante, se solicita que los datos de la suscrita Lizbeth Escorcía Martínez no se testen ya que soy quien hace la solicitud y soy responsable del uso que dé a los mismos.”.**

Al respecto, se hace de su conocimiento que, en cumplimiento al principio de máxima publicidad, se realizó con un criterio amplio y razonable una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos a cargo de esta Coordinación, de la que se advierte que no se cuentan con los listados del personal que contrataron las empresas **NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V.** y **NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V.**, para prestar los servicios objeto de los contratos celebrados con la Secretaría de Economía.

Cabe señalar, que de la revisión a los expedientes de los contratos números **DGRMSG-59-15**, **DGRMSG-60-16** y **DGRMSG-60-17** que obran en la Coordinación de Convenios y Contratos, se advierte que la Secretaría de Economía contrató a las personas morales **NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V.** y **NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V.**, para que prestaran los servicios especializados con terceros para diversas áreas de la Dependencia, y no así a personas físicas.



Lo anterior, se advierte de lo previsto en el Anexo 1 “ANEXO TÉCNICO” de los contratos números **DGRMSG-59-15** y **DGRMSG-60-16**¹⁰, en el que la Secretaría de Economía para la contratación que efectuó estableció los perfiles¹¹ del personal requerido, sin señalar nombre alguno de las personas que ocuparían los puestos ahí mencionados, para las diversas unidades administrativas de la propia dependencia.

Asimismo, se infiere que las personas morales contratadas por la Secretaría de Economía son las que posiblemente hayan celebrado algún tipo de contrato con las personas físicas que se necesitaron para prestar los servicios que requería esta Dependencia, toda vez que de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico de los contratos, se prevé que los servicios deberán ser prestados por una persona moral que, entre otros elementos, **debe de disponer del personal solicitado por la Secretaría para la prestación del servicio.**

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio con clave de control: **SO/007/2017**, antes transcrito, toda vez que no se advierte obligación alguna de esta unidad administrativa para contar con la información, derivado del análisis a la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, y además no se tienen elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos.

Por lo que corresponde, al requerimiento de “**4. Copia certificada de los contratos laborales que sostuvieron las empresas NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V. (periodo primero de noviembre del año 2015 al 31 de marzo del año 2016), y NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V. (del primero de abril del año 2016 al 31 de octubre del año 2017), con la ciudadana Lizbeth Escorcía Martínez.**”, se hace de su conocimiento que también resulta aplicable el multicitado criterio con clave de control: **SO/007/2017**.

Ello es así, toda vez que la información de los contratos de las personas físicas que contrataron cada una de las empresas proveedoras del servicio, seguramente obran en poder de las mismas, ya que ellas fueron quienes directamente contrataron a las personas para la prestación de los servicios especializados con terceros para las diversas áreas de la Secretaría de Economía.

Lo anterior, máxime si consideramos como se ha señalado que la Secretaría de Economía no contrató de forma directa a las personas físicas para que le prestaran un servicio alguno, sino que contrató a personas morales para la prestación de los servicios objeto de los contratos.

Por lo antes expuesto, es que esta área jurídica no cuenta con documentos que permitan verificar qué personal prestó servicios a esta Secretaría de Economía, derivado de los contratos números **DGRMSG-59-15**, **DGRMSG-60-16** y **DGRMSG-60-17**, de ahí que no se localizó información sobre contratos laborales celebrados entre la C. Lizbeth Escorcía Martínez y las empresas **NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V.** y **NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V.** del primero de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2017.

Por otra parte, es de señalar que el viernes 27 de octubre de 2023, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Economía remitió en alcance a esta solicitud de acceso a la información, la petición siguiente, solicitando el pronunciamiento respectivo.

“Justificación para exentar pago: Actualmente me encuentro desempleada y no cuento con el recurso económico para realizar el pago. La información la requiero pues estoy en proceso de demanda laboral en contra de la Secretaría de Economía por despido injustificado, pues me corrieron por negarme a dar mi renuncia pues soy personal del

¹⁰ Del contrato número DGRMSG-60-17, en los archivos de esta Coordinación de Convenios y Contratos, no se cuenta con el Anexo Técnico.

¹¹ Los elementos que integran el perfil son: denominación del puesto, contraprestación neta mensual, escolaridad y/o experiencia requerida y/o conocimientos, actividades a desarrollar y si necesita o no equipo de cómputo.



servicio profesional de carrera y eso significa que tengo estabilidad en el empleo pues concursé la plaza y la gané; y solamente puedo ser removida del cargo si incumplo los supuestos contemplados en el artículo 64 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. No obstante, en caso de no ser considerada mi situación, haré todo lo posible por cubrir el costo de las copias certificadas pues me son indispensables para la demanda laboral que he mencionado. Por último, agradeceré recibir en la oficina del INAI los originales de las copias certificadas pues serán documentos probatorios en la demanda laboral que entablo en contra de dicha dependencia federal. Gracias. " (Sic).

Al respecto, me permito comentarle que el artículo 5, fracción I de la Ley Federal de Derechos establece que tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que sean prestados por cualquiera de las Secretarías de Estado, se pagarán derechos conforme a las cuotas que para cada caso a continuación se señalan, salvo en aquellos casos que en esta Ley se establecen expresamente, **expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio \$25.03.**

Relacionado con lo anterior, el artículo 3 de la propia Ley Federal de Derechos, establece en la parte que nos interesa lo siguiente:

"Artículo 3o.- Las personas físicas y las morales pagarán los derechos que se establecen en esta Ley en las oficinas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El pago de los derechos que establece esta Ley deberá hacerse por el contribuyente previamente a la prestación de los servicios o previo al uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, salvo los casos en que expresamente se señale que sea posterior.

Cuando no se compruebe que el pago de derechos se ha efectuado previamente a la prestación del servicio o del uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación y se trate de derechos que deban pagarse por anticipado, el servicio, uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación no se proporcionará.

[...]

Al servidor público encargado de la prestación de los servicios o del otorgamiento del uso, goce, explotación o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación que incumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior se le impondrán las sanciones que correspondan de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

[...]"

Como se observa de la disposición invocada, las personas servidoras públicas tienen la obligación de cobrar los derechos que correspondan por la prestación de bienes o servicios a cargo del Estado, por lo que, de no cumplir con esta obligación, pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa.

En efecto, el cobro de los derechos, no es una facultad potestativa a cargo de las autoridades federales, por el contrario, se trata de una obligación que como personas servidoras públicas están obligadas a cumplir, sin que exista la posibilidad de justificar el no cobro de los derechos respectivos por cualquier circunstancia -como en el caso que nos ocupa, por la falta de recursos económicos para cubrir su pago por la falta de empleo-.



*En tal virtud, esta Coordinación de Convenios y Contratos no está en aptitud de eximir el pago de los derechos correspondientes por las copias certificadas de los Contratos números **DGRMSG-59-15, DGRMSG-60-16 y DGRMSG-60-17**, y sus Convenios Modificatorios, que asciende a la cantidad de **\$1,626.95 (Mil Seiscientos Veintiséis Pesos 95/100 M.N.)**.”*

Es importante advertir que, en lo referente a los contratos números DGRMSG-59-15, DGRMSG-60-16 y DGRMSG-60-17, y sus Convenios Modificatorios, se pondrá a su disposición en versión pública, dado que los documentos solicitados contienen **información confidencial** que debe ser protegida conforme lo previsto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo que respecta a “4. *Copia certificada de los contratos laborales que sostuvieron las empresas NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE S. DE R.L. DE C.V. (periodo primero de noviembre del año 2015 al 31 de marzo del año 2016), y NEGOCIOS UNIVERSAL TD2 S. DE R.L. DE C.V. (del primero de abril del año 2016 al 31 de octubre del año 2017), con la ciudadana Lizbeth Escorcía Martínez.*”, esta Secretaría de Economía no puede atender lo solicitado, en virtud de que la información de los contratos de las personas físicas que contrataron cada una de las empresas proveedoras del servicio, seguramente obran en poder de las mismas, ya que esta dependencia federal **no contrató de forma directa a las personas físicas para que le prestaran un servicio alguno, sino que contrató a personas morales para la prestación de los servicios objeto de los contratos.**

Ahora bien, en lo tocante a la “*justificación para exentar pago*” solicitada, esta Secretaría de Economía se encuentra imposibilitada para eximir el pago de los derechos correspondientes, toda vez que, como se ha mencionado a lo largo del presente oficio, el cobro de los derechos, no es una facultad potestativa a cargo de las autoridades federales, por el contrario, se trata de una obligación que como personas servidoras públicas están obligadas a cumplir, sin que exista la posibilidad de justificar el no cobro de los derechos respectivos por cualquier circunstancia.

En ese sentido, la información solicitada será entregada previo pago de derechos, toda vez que implica el procesamiento de documentos para la elaboración de las versiones públicas y la emisión de copias certificadas, además de que la misma consta de mil doscientas ochenta y cinco (1,285) fojas.

Lo anterior, se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, fracciones II y III, 3, fracción XX, 4, 6, 11 a 19, 21 a 23, 129, 131 a 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1, 2, fracciones I, II, III y VIII, 3, 9, 12, 13, 15, 130, cuarto párrafo, 133 a 136 y 144 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ATENTAMENTE
Unidad de Transparencia

SEGZ/JCMS